



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CIVIL

Medellín, veintiocho de marzo de dos mil veintidós

Tipo de pretensión:	Responsabilidad civil por incumplimiento contractual
Procedencia:	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado
Demandante:	Juan Camilo López Tobón
Demandados:	Ángela María López Tobón
Radicado:	05266 31 03 002 2018 00334 01
Asunto:	Confirma decisión de primera instancia

OBJETO

La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante frente a la sentencia de fecha 10 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

La demanda (arch. 01 c.1):

Juan Camilo López Tobón demandó a Luz Gabriela López Tobón, dando lugar a un proceso de responsabilidad civil por incumplimiento contractual.

El 23 de febrero del año 2009 el demandante suscribió un contrato de compraventa a través del cual vendía a la demandada una casa ubicada en la Calle 36 DC núm. 26ª -62, Urbanización La Clarita del municipio de Envigado, por un precio de \$185.000.000. En la escritura se afirma que el vendedor recibió el precio a satisfacción.

En la demanda afirma que ese contrato fue simulado. La compradora, hermana de éste, no pagó el precio, ni ejerció ningún acto de posesión sobre el inmueble. El

demandante siguió viviendo en él durante años después de la compra, con su madre. Sólo hasta el 2013 su hermana se iría a vivir al inmueble.

Sobre este punto se explica que el demandante habría estado privado de su libertad hasta febrero de 2009. A su salida, el actor habría accedido a firmar la escritura de venta transfiriendo el inmueble a su hermana, quien residía fuera del país, para prevenir que la casa a su nombre se perdiera en manos de sus acreedores. No obstante, posteriormente, su hermana alegaría que la casa le pertenecía porque ella había asumido gastos y pagado deudas del demandante mientras éste estuvo privado de su libertad. El actor niega haber acordado entregar su casa a su hermana a cambio de que pagara sus deudas. También niega que fuera ésta quien las pagara, señala que fue su madre.

En la demanda se reconoce que la pretensión de simulación ya fue presentada y decidida negativamente por la jurisdicción. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado conoció el proceso y negó las pretensiones. La decisión se confirmó por el Tribunal Superior de Medellín. La Corte Suprema inadmitió una casación en el asunto.

El razonamiento de la parte demandante es el siguiente: si el contrato no fue simulado como ya decidió la jurisdicción, entonces fue completamente incumplido por la compradora, puesto que el precio no se pagó en absoluto.

Con base en lo anterior, el actor pretende que se declare el incumplimiento del contrato de compraventa y su resolución, ordenando a la demandada devolver el inmueble y los frutos civiles que debió producir en su posesión. En subsidio, pide que se condene a la compradora a *“hacer devolución de la suma de \$277.500.000, correspondientes al valor catastral del inmueble para el año 2009 incrementado en un 50%”*.

La contestación de la demanda (cfr. arch. 12, c.1):

La demandada se opuso a las pretensiones.

La opositora afirma que en el año 2000, época en la que residía fuera del país, entregó a su madre unos dineros para la compra de la casa objeto de disputa. Lo anterior, bajo la convicción de que la casa se transferiría su mamá, para ejercer el dominio en conjunto con ella. Sin embargo, por acuerdo entre su madre y su hermano Juan Camilo, no conocido ni aceptado por ella, en el negocio de la casa éste figuró como comprador, sin aportar un solo peso para su adquisición.

En el año 2006, la demandada se enteró de esta situación por dos razones: la privación de la libertad del demandante y los reclamos de los acreedores de éste, con pretensión de cobrarse las deudas con la casa. Ante esta situación, con el objeto de proteger su patrimonio, la demandada pagó \$160.000.000 a los acreedores de su hermano.

Así, como fue la demandada quien puso el dinero para la compra inicial del inmueble, que sin su conocimiento ni consentimiento se puso a nombre del demandante, y quien además pagó las obligaciones de éste para evitar que el bien se perdiera en manos de los acreedores, el demandante se comprometió a transferir el dominio del inmueble una vez cumpliera su condena.

Según la opositora, eso fue lo que se hizo: una vez recuperó su libertad, suscribió la escritura de compraventa del año 2009, transfiriéndole la casa a su hermana.

Se afirma además que todas estas cuestiones se definieron en el proceso de simulación, donde los jueces del caso reconocieron que la demandante era la única dueña de la casa.

Propone las siguientes excepciones:

- Prescripción, pues se alega que el negocio cuya resolución se pretende es del 23 de febrero de 2009 y transcurrieron ya los términos extintivos del derecho a reclamar.
- Pago, pues la demandante no sólo fue quien pagó la casa en primer lugar, sino que después tuvo que salvarla de los acreedores de su hermano.

- Falta de causa, pues el haber fracasado la simulación, no puede negarse la voluntad expresada en la escritura.
- Cobro de lo no debido, pues en el proceso de simulación ya se definió la validez y el cumplimiento del contrato que sirve de causa a las pretensiones.
- Enriquecimiento sin causa, por las causas ya expuestas.
- Cosa juzgada, pues se considera que la situación jurídica que propone este litigio ya fue resuelta en el proceso de simulación. Allí se definió: a. que la demandada había pagado el inmueble en el año 2000. b. Que la demandada había pagado deudas del demandante por \$160.000.000, en el año 2006, para no perder la casa. c. Que es la única dueña de la casa. En tanto en el proceso de simulación se negó la pretensión, no puede cuestionarse las declaraciones de la escritura, incluida la referida al pago del bien.

La sentencia de primera instancia (cfr. arch. 48, c.1):

El juez declaró probada la excepción de prescripción mediante sentencia anticipada. Su razonamiento fue el siguiente:

Como el contrato que sirve de causa a la pretensión se celebró el 23 de febrero de 2009, el derecho a reclamar el cumplimiento o la resolución de las obligaciones contractuales prescribía el 23 de febrero de 2019. La demanda se presentó antes de que ocurriera la prescripción, el 6 de diciembre de 2018. Su admisión y notificación a la parte demandante fue el 29 de enero de 2019. Sin embargo, la notificación de ese auto a la demandada sólo se presentó efectivamente el 3 de noviembre del año 2020. Es decir, ya ocurrida la prescripción.

En consecuencia, como la excepción se alegó por la parte opositora, ésta se reconoció.

La apelación de la parte demandante (cfr. arch. 5 C.2):

La apoderada de la parte demandante apeló la sentencia en audiencia, presentó reparos y sustentó ante esta instancia.

- Aunque se reconoce que la demandante alegó la prescripción, se alega que la fundamentó en el hecho de que la demanda no se hubiera presentado dentro del término de prescripción. Nada se dijo sobre el término de notificación a la demandada. En consecuencia, se considera que la excepción que se declaró no se alegó oportunamente, por tanto, se reconoció de oficio y sin que existiera oportunidad de la parte para controvertirla adecuadamente.
- También se alega que la parte demandante fue diligente al intentar la notificación. Para decidir, no se tuvo en cuenta que si no se logró la notificación del auto admisorio de la demandada dentro del año siguiente, ello se debió a “actuaciones desplegadas” por la opositora y a un proceso “que fue muy demorado”.

Se señala que la demandada recibió tanto la citación personal como la notificación por aviso antes de que transcurriera un año de la admisión de la demanda. Sin embargo, ni concurrió a notificarse ni contestó.

La constancia de la citación personal se habría presentado el 2 de septiembre de 2019. La constancia de notificación por aviso, el 28 de febrero de 2020. Se alega que el juzgado debió dar trámite a la citación, validando el trámite para poder proseguir con el aviso. No lo hizo. Sólo hasta el 23 de julio de 2020 expidió un auto señalando que debía repetirse el proceso de notificación, que finalmente culminó con la notificación de noviembre de 2020.

Se imputan silencios y demoras al juzgado. Se alega que la demanda efectivamente recibió la primera citación y aviso, sin concurrir a notificarse. Se alega la diligencia de la parte actora en el intento de notificación.

Las alegaciones de la parte demandada (cfr. arch. 7)

Sobre los cuestionamientos respecto de la proposición efectiva de la excepción de prescripción, se señala que ésta efectivamente se alegó en la contestación a la demanda.

Se niega que la demandada hubiera recibido citaciones o avisos distintos a un sobre sin sello de seguridad que encontró en noviembre de 2020. Llamó al juzgado y le dieron una cita para el 3 de noviembre del mismo año, fecha en la que fue a notificarse personalmente. Se afirma que esto se expresó desde la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES**Problema jurídico:**

El apelante cuestiona la sentencia de primera instancia por considerar que, aunque no se alegó adecuadamente la prescripción, el juez de primera instancia la reconoció de oficio. Sobre este punto se considerará ¿Cuándo debe entenderse alegada la prescripción? ¿La eficacia de la alegación depende de una adecuada realización del cómputo prescriptivo en la contestación de la demanda? ¿Qué condiciones deben respetarse para garantizar la contradicción del actor?

Por otro lado, el apelante cuestiona que no se haya reconocido la interrupción de la prescripción desde la presentación de la demanda, a pesar de que la notificación de la parte demandada no se logró dentro del año siguiente a la notificación del auto admisorio de la demanda, debido a conductas imputables al juzgado y a la misma parte opositora. ¿Bajo qué condiciones puede interrumpirse el término de prescripción de un derecho desde la presentación de la demanda, aunque no se logre notificar el auto admisorio al opositor dentro del año siguiente? ¿Qué cargas debe cumplir el demandante para beneficiarse de ésta excepción?

Fundamento jurídico:*La excepción de prescripción y su alegación efectiva:*

El artículo 282 del CGP señala que el juez debe reconocer oficiosamente en la sentencia los hechos probados que se constituyan en una excepción, salvo cuando se trate de las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deben ser alegadas en la contestación de la demanda. Por tanto, si el opositor no cumple con la carga de alegarla, el juez no debe declararla. Tratándose concretamente de la prescripción extintiva, la omisión de alegarla oportunamente implica renunciar al derecho a beneficiarse de ella.

¿Cuándo se entiende alegada la prescripción? El artículo 96.3 del CGP señala que las excepciones deben proponerse “*con expresión de su fundamento fáctico*”. Esto significa que una excepción se entiende alegada cuando en la contestación de la demanda se solicita expresamente que se deniegue la pretensión, por haberse configurado una situación jurídica que *impide* reconocer el derecho que se reclama, o que *modifica* el contenido de tal derecho, o que lo *extingue*. El fundamento fáctico son los hechos que a juicio del opositor configuran esa situación jurídica.

Tratándose de la prescripción extintiva, el opositor debe manifestar expresamente y con total claridad, que el derecho que reclama el demandante en su pretensión se extinguió por haber transcurrido el término legal de prescripción. No es necesario que se utilice una formula o un ritualismo específico, pero sí debe ser claro que el demandante se opone a la pretensión, por considerar extinguido el derecho del actor en razón del paso del tiempo. Si se cumple esta carga mínima, la excepción debe estudiarse de fondo y resolverse.

La carga legal de alegar la prescripción fue declarada exequible por la Corte Constitucional -sentencia C-091 de 2018-. La Corte consideró que esta carga es un medio razonable para proteger la autonomía de la voluntad.

La razón de ser de que en los asuntos regidos por el derecho privado y, en este caso, por el Código General del Proceso, la prescripción deba ser alegada como una carga procesal, radica en que con el transcurso del tiempo necesario para la prescripción del derecho o de la obligación, surge para el deudor la posibilidad, mas no la obligación, de oponerse al cobro, como una medida pensada en su interés particular, razón por la cual, una vez cumplido el tiempo, quien puede beneficiarse de ella pueda renunciar de manera expresa o tácita a la misma, sin comprometer el interés general (artículo 2514 del Código Civil) y aceptar voluntariamente, por esta vía, la ejecución de la obligación. En otras palabras, la no oposición de la excepción de prescripción en el proceso, constituye un acto dispositivo de renuncia o abandono de la misma, frente a la cual, es necesario concluir que el legislador, al prohibir el reconocimiento oficioso de la prescripción, en las normas demandadas, buscó justamente amparar la autonomía de la voluntad privada, limitada por la posibilidad de que la misma pueda ser alegada por terceros con interés en subrogación del deudor. La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción y así se opuso a su realización y el juez que la declaró en la sentencia. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.

En tanto la finalidad de la norma legal que impone la carga de alegar la prescripción es proteger la autonomía de la voluntad, ésta se cumple cuando el opositor expresa claramente su intención de oponerse a la prosperidad de las pretensiones, por haberse configurado la prescripción del derecho que se reclama.

Ahora bien ¿Debe entenderse alegada la prescripción, aunque no se realicen los cómputos del término de prescripción al momento de alegarla?

La Sala considera que la respuesta es positiva.

Desde luego, si se alega la prescripción, es mucho más técnico y preciso realizar adecuadamente los cómputos respectivos desde la contestación de la demanda. Incluso, de no hacerse y considerarse necesario para continuar el proceso, esa falta

de claridad podría dar lugar a actuación de saneamiento por el juez director del proceso al momento de fijar el litigio. No obstante, en muchos casos, la interpretación conjunta de la contestación de la demanda con sus anexos –no sólo el acápite de pretensiones– pueden resultar suficientemente claros sobre el fundamento fáctico de la prescripción, aunque no se realice el cómputo expresamente.

Es importante considerar que al imponer la carga de alegar la prescripción, la ley no está intentando proteger la técnica argumentativa para proponer excepciones, sino la autonomía de la voluntad de la parte. Por eso, basta que sea clara la intención del opositor de beneficiarse de la prescripción, su voluntad de no renunciar a ella, que lo alegue expresamente en la contestación de la demanda, para que el juez esté en la obligación de realizar los cálculos respectivos y resolver las excepciones.

Frente a lo anterior podría argumentarse que aceptar la alegación de una prescripción a pesar de que no se realicen expresa o adecuadamente los cálculos, puede afectar el derecho de contradicción de la parte demandada. Por ejemplo, en el evento de que se omita hacer el cálculo, la oposición ejerce defensa frente a un cálculo específico y la prescripción termina reconociéndose en razón de un cálculo distinto. Podría sostenerse que frente al cálculo en razón del cual se declaró la prescripción, la parte opositora no pudo ejercer adecuadamente la contradicción, dado el cumplimiento irregular de la carga al momento de alegar la excepción.

En cualquier caso, una restricción relevante al derecho de contradicción del actor por la indebida formulación de una excepción, implicaría verificar antes que la parte no tuvo oportunidades procesales para ejercer una defensa efectiva frente al hecho exceptivo dentro del proceso.

Por tanto, resulta razonable que el demandante a su vez asuma las cargas no sólo de exigir las claridades que considere necesarias sobre la excepción que se le opone a su pretensión –por ejemplo, pidiendo la intervención del juez para lograr claridad

en cuanto a los cómputos prescriptivos con efectos de ejercer la contradicción-, sino además alegando todos los hechos impeditivos para el reconocimiento de la excepción, dentro del término de traslado a las excepciones o en la audiencia de fijación del litigio, o en las alegaciones previas a la sentencia.

En este orden de ideas, si la parte demandante puede ejercer efectivamente la contradicción frente al cómputo prescriptivo del juez de primera instancia a través del recurso de apelación, la discusión sobre si la excepción se propuso o no adecuadamente para efectos de contradecirla resulta irrelevante, en la medida que la contradicción se garantiza precisamente a través del recurso de apelación.

En síntesis, la tesis que se defiende sobre este punto es el siguiente:

- a. Si de la contestación de la demanda, leída en su totalidad como acto complejo, resulta claro 1. cuál es el derecho que se considera prescrito 2. desde cuando se hizo exigible es derecho 3. y la intención expresa del demandado de beneficiarse de la prescripción, entonces debe entenderse que se cumplió con la carga del artículo 282 del CGP. Por tanto, si la excepción cumple con estas condiciones, su resolución en sentencia es rogada y no de oficio.
- b. Bajo este supuesto, si el actor considera que deben aclararse cuestiones relativas al cómputo para defenderse de la prescripción, su carga consiste en agotar las oportunidades legales para lograr esa claridad en la actuación de primea instancia –reposición del auto que da traslado a las excepciones, solicitud expresa en la audiencia de fijación del litigio, etc-, y ejercer una contradicción de fondo a la excepción.. Es una mala estrategia defensiva frente a un hecho exceptivo atacar sólo cuestiones relativas a la manera como éste se formula
- c. En cualquier caso, no hay violación del derecho de contradicción si el actor puede cuestionar el cómputo que se realizó en primera instancia para declarar la prescripción a través del recurso de apelación.

La interrupción de la prescripción con la notificación al demandado y sus excepciones.

Según el artículo 94 del CGP, la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado en un año a partir de la notificación de ese auto al demandante. Si la notificación ocurre después, los efectos de la interrupción solo se producen con la notificación efectiva al demandado.

Ahora bien ¿puede alegarse que la prescripción se interrumpió desde la presentación de la demanda, a pesar de que la notificación al demandado es posterior a ese año?

Desde luego, la respuesta es negativa como regla general, en atención al mandato legal del artículo 94 del CGP. No obstante, pueden darse casos en que la tardanza para notificar al demandado no se deba a omisiones imputables a la parte demandante, quien puede probar diligencia al intentar cumplir sus cargas, sino a fallas del juzgado por negligencia o mora judicial, o por maniobras o actividades elusivas del demandado, contrarias a su deber de lealtad procesal. Si estos hechos se encuentran probados, entonces debe reconocerse la interrupción de la prescripción desde la presentación de la demanda.

Estos eventos exceptivos de la regla general del artículo 94 del CGP han sido reconocidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (SC56082-2018), interpretando los pronunciamientos de constitucionalidad de la Corte Constitucional sobre la proporcionalidad de la regulación procesal sobre la interrupción de la prescripción (sentencias C-1104 de 2001, C-1512 de 2000 y C-662 de 2004).

“La interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad que favorecen al demandante diligente, no pueden resultar afectadas por una circunstancia que no es atribuible a su negligencia. Es decir que una interpretación sistemática de las normas procesales que regulan las consecuencias adversas que se derivan del incumplimiento de una carga procesal, como la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado,

impone la necesaria conclusión de tener en cuenta las circunstancias objetivas ajenas a la conducta del demandante que le impiden cumplir oportunamente esa carga procesal, lo cual no puede ser de otra manera si se tiene en cuenta que no es jurídicamente posible imponer una carga procesal si no se cumple el presupuesto objetivo de su realización.

En conclusión: el efecto que consagra el artículo 90 del Código de Procedimiento civil (94 del Código General del Proceso), cuando el auto admisorio no se notifica al demandado en el plazo señalado en esa disposición, tiene como finalidad hacer cumplir la carga de impulso procesal que asiste al demandante, se suerte que si no la realiza sufre las consecuencias adversas allí previstas, esto es la no interrupción de la prescripción u operancia de la caducidad; y si la cumple o no tiene la posibilidad real, material y objetiva de cumplirla, estos institutos operan a su favor de manera indefectible.

(...)

En cualquier caso, las consecuencias adversas por el incumplimiento de una carga procesal exigen como condición o presupuesto para su imposición, que el incumplimiento se deba a las posibilidades de decisión o actuación de la parte interesada, es decir, que sea su responsabilidad; pero jamás podría entenderse como una “sanción” o “castigo” que tiene que asumir por el simple hecho, ajeno a su conducta, del paso del tiempo; o por la imposibilidad de cumplir su carga debido a factores originados en deficiencias de la administración de justicia o en la mala fe de su contraparte” (SC56082 del 19 de diciembre de 2018, MP Ariel Salazar Ramírez).

Obsérvese que para que el demandante pueda beneficiarse de estas excepciones al término legal del artículo 94 del CGP para efectos de interrupción de la prescripción, tienen que concurrir dos supuestos fundamentales: a. que el demandante haya intentado cumplir diligentemente con la carga procesal de notificar a su contraparte y b. que la notificación haya sido imposible por razones objetivas imputables al juzgado o al propio demandado. Es de aclarar que la carga de afirmar y probar estos supuestos corresponde al demandante que pretende beneficiarse de la excepción, en atención a la regla de distribución de cargas probatorias del artículo 167 del CGP.

Para este caso conviene considerar dos circunstancias específicas sobre las cargas del demandante para efectos de notificación a su contraparte.

El deber de diligencia incluye, por un lado, atenerse a las reglamentaciones legales y administrativas para intentar la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado. Si los intentos de notificación por parte del demandante son irregulares y esto incide en la dilación del trámite, entonces no podría sostenerse que fue diligente en el cumplimiento de su carga. Ésta debe ser asumida, en todo caso, atendiendo la ley.

Por otro lado, si la discusión sobre interrupción de la prescripción supone cuestionar decisiones judiciales que se tomaron durante el trámite de la primera instancia sobre el particular, una carga mínima de diligencia consiste en haber formulado los recursos legales pertinentes para cuestionar esas decisiones, en el momento procesal oportuno.

Así, por ejemplo, si el juez da por notificada a la parte demandada mediante un auto concreto, y el demandado considera que la parte estaba ya notificada anteriormente y que se están reviviendo términos procesales, su carga es impugnar esa decisión en término mediante los recursos legales. Si guarda silencio, se entiende que está conforme con ella. Por tanto, dada la preclusividad de las etapas procesales, no puede alegar posteriormente que ese auto debe desconocerse para efectos del cómputo de la prescripción.

Caso concreto:

I.

Este es el razonamiento del juez de primera para declarar probada la prescripción: el contrato de compraventa que sirve de causa a la pretensión se celebró y produjo efectos desde el 23 de febrero de 2009. En consecuencia, el derecho a reclamar el cumplimiento o la resolución de las obligaciones contractuales prescribía el 23 de febrero de 2019. La demanda se presentó antes de ocurriera la prescripción, el 6

05266 31 03 002 2018 00334 01

MP. Martín Agudelo Ramírez

de diciembre de 2018. Su admisión y notificación a la parte demandante fue el 29 de enero de 2019. Sin embargo, la notificación de ese auto a la demandada sólo se presentó efectivamente el 3 de noviembre del año 2020. Es decir, ya ocurrida la prescripción. Por tanto, se declaró probada la excepción.

Atendiendo los cuestionamientos de parte, la Sala debe resolver si: ¿Se alegó adecuadamente la excepción de prescripción en primera por la parte interesada, o el juez la declaró de oficio, desconociendo la prohibición legal? ¿Se dejaron de valorar circunstancias objetivas que exceptúan el término del artículo 94 del CGP, por lo que la interrupción de la prescripción habría ocurrido desde la presentación de la demanda?

Sobre el primer punto tenemos que en la contestación de la demanda se afirmó lo siguiente (cfr. arch. 12):

EXCEPCIONES DE MERITO

1. PRESCRIPCION

De conformidad con nuestra legislación colombiana la acción para pedir la resolución del contrato civil de compraventa ha prescrito en favor de mi representada, desde el momento de la suscripción de la escritura pública en favor de la señora ANGELA MARIA LOPEZ TOBON, hasta la instauración de la demanda de simulación radicada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado radicado 2014-555 cual termina con la ratificación y validez del negocio jurídico dejando en firme la escritura 346 del 23 de febrero de 2009, como igualmente lo ratifica el artículo 1934 del Código Civil, el cual expresamente permite entender que el afirmar en la escritura el haber recibido el precio, no admite prueba en contrario sino la nulidad o la falsificación permitiendo aseverar que además de ser un negocio jurídicamente valido desde la firma de la escritura pública hasta la instauración de la demanda de simulación así como la presente acción han transcurrido suficientes años que permitan declararla como solicitud de parte dada la imposibilidad de declararla oficiosamente.

En el entendido de la solicitud de la prescripción se ruega de su despacho se digne otorgarla en consideración a lo sucedido desde el año 2009 hasta la presentación de la presente acción.

Desde el traslado a las excepciones (cfr. arch. 34), la parte demandada se opuso a la prosperidad de la excepción, alegando que ésta no se había fundamentado ni jurídica ni fácticamente. Se alega que no se incluyó el cómputo prescriptivo. En la apelación, se insiste en que esto afectó el derecho de contradicción.

Aunque al formular la excepción efectivamente no se realizó un cómputo ni se citaron normas concretas, de la lectura de este apartado citado, en consonancia con los hechos de la contestación de la demanda y la estrategia defensiva que puede interpretarse en ella, el razonamiento del opositor resulta claramente comprensible: en tanto se denegó la pretensión de simulación, la compraventa es válida y sus obligaciones se hicieron exigible en el 2009. Por tanto, el término para cuestionar el cumplimiento o la resolución del contrato se encuentra prescrito.

Esta alegación cumple con las condiciones mínimas de razonabilidad para entender alegada la excepción porque: 1. Resulta claro cuál es el derecho que se exceptiona: la exigibilidad del cumplimiento o la resolución del contrato de compraventa. 2. También hay certeza sobre la fecha de celebración del contrato y la exigibilidad de sus obligaciones: 23 de febrero de 2009, lo que permite hacer el cómputo prescriptivo 3. No queda duda de que la parte demandada tiene intención de beneficiarse de la prescripción.

Se considera que el hecho de que la parte opositora no realizara expresamente los cómputos prescriptivos, ni hiciera distinciones entre presentación, admisión o notificación de la demanda, aunque es una falta de técnica, no se advierte en ello ni deslealtad ni tampoco una afectación real al derecho de contradicción de la parte demandante.

Como la formulación de la excepción resultaba clara sobre cuáles eran las obligaciones que se estaban alegando prescritas –las derivadas del contrato de compraventa del 2009 que el actor pretende resolver-, la parte demandante tuvo plena oportunidad para alegar todas las circunstancias fácticas y jurídicas que impidieran la configuración del fenómeno prescriptivo. Si el problema era claridad en la formulación de la excepción ¿por qué no se solicitó formalmente su aclaración? La falta de claridad de un acto procesal no conlleva a su desestimación o ineficiencia sino a su aclaración. En lugar de ellos, el opositor se limitó a hacer cuestionamientos formales sobre la manera como su contraparte expresó la excepción y a pedir que se desestimara por eso. Si habían circunstancias objetivas

que obstaculizaran la prescripción ¿Por qué no se formularon clara y expresamente?

Asimismo, en la audiencia respectiva, el juez concedió a las partes un término específico para presentar sus alegaciones respecto de la prescripción, previa solicitud de la parte demandada. Durante ese trámite, tanto la parte demandada como demandante propusieron su comprensión del cómputo prescriptivo y estos fueron considerados por el juez en su decisión. En consecuencia, es falso que la parte no hubiera tenido oportunidad para presentar sus consideraciones sobre este aspecto del litigio.

Por último, aún si en gracia de discusión se aceptara que el juez de primera instancia sorprendió a la parte demandante reconociendo una prescripción a partir de un cómputo no formulado expresamente en la contestación a la demanda, lo cierto es que la posibilidad efectiva de ejercer la contradicción frente a tal cómputo es el recurso de apelación. La resolución del recurso, atendiendo los cuestionamientos de la parte respecto de los cálculos es precisamente el medio a través del cual la ley garantiza a la parte que se escuchen sus cuestionamientos.

En consecuencia, como la parte demandada alegó expresamente la prescripción y efectivamente la parte demandante tuvo oportunidades para contradecirla tanto formal como materialmente, se considera que el juez respetó los límites legales para la resolución de excepciones del artículo 282 del CGP.

II.

Ahora bien, el siguiente punto a examinar es si en este caso se presentaron circunstancias objetivas, imputables al juzgado o la parte demandada, que exceptúen el término previsto en el artículo 94 del CGP, sobre la necesidad de notificar al demandado del auto admisorio a la demanda dentro del año siguiente a su notificación al demandante, para que la prescripción se entienda interrumpida desde la presentación de la demanda.

La parte demandante alega que la parte demandada recibió tanto la citación personal como la notificación por aviso antes de que transcurriera un año de la admisión de la demanda. Sin embargo, ni concurrió a notificarse ni contestó.

Según el apelante, la constancia de la citación personal se habría presentado el 2 de septiembre de 2019. La constancia de notificación por aviso, el 28 de febrero de 2020. Se alega que el juzgado debió dar trámite a la citación, validando el trámite para poder proseguir con el aviso. No lo hizo. Sólo hasta el 23 de julio de 2020 expidió un auto señalando que debía repetirse el proceso de notificación, que finalmente culminó con la notificación de noviembre de 2020.

Sobre estas afirmaciones se considera que aunque efectivamente hubo un intento de notificación personal y por aviso antes del 23 de julio de 2020, éstos intentos se rechazaron por el juez de primera instancia mediante auto de esa fecha, por considerarlos irregulares. Según se afirma en esa decisión, ni la citación ni el aviso contenían la fecha de entrega en la guía de recibo, por lo que no se podía determinar el tiempo de comparecencia con el que contaba la citada a notificarse (cfr. arch. 4 fl. 267).

La irregularidad de los intentos de notificación antes del 23 de julio de 2020 es una decisión en firme, frente a la cual la parte demandante mostró tácitamente su conformidad. Si la parte demandante consideraba que la demandada estaba adecuadamente notificada, debió proceder a impugnar el auto que la daba por notificada. En cualquier caso, se trata de una cuestión ya definida por el juez de instancia en el marco de su competencia, en una etapa ya precluida del proceso, que no puede reabrirse sin más a través de un recurso de apelación frente a la sentencia.

Por tanto, el argumento según el cual la parte demandada estaba notificada antes del 23 de julio de 2020, no solo carece completamente de fundamento probatorio, sino que además contradice una decisión judicial ejecutoriada.

Por otro lado, la parte apelante señala que existieron demoras y omisiones del juzgado que habrían incidido en la dilación del trámite de la notificación, como el hecho de no haberse pronunciado sobre la validez de la citación personal del 28 de septiembre de 2019, o de haberse demorado hasta el 23 de julio de 2020 para definir la legalidad del aviso cuya constancia de entrega se presentó desde el 28 de febrero del mismo año.

Este argumento es débil por varias razones. Por un lado, porque si hubo necesidad de corregir el proceso de notificación anterior al 23 de julio de 2020 fue porque la parte demandante no cumplió adecuadamente con sus cargas, específicamente la constancia de la fecha de entrega, prevista en el inciso 4º numeral 3º del artículo 291 del CGP. En consecuencia, si hubo alguna dilación por esta causa, tiene su origen en una culpa imputable a la parte interesada en la notificación, pues allegó constancias que no cumplían con los parámetros legales. Intentar la notificación sin cumplir las condiciones de ley, no puede valorarse como “diligencia”.

Asimismo, aunque la apelante considera que “lo normal” es que el juzgado avale la legalidad del envío de la citación antes de proceder con el aviso, lo cierto es que esa práctica de dirección del proceso de notificación, justificable y adoptada por muchos despachos judiciales, no es una obligación legal expresa para el juez. Desde luego, éste sólo puede avalar una notificación por aviso cuando se intenta legalmente la notificación personal y ésta no se logra. Sin embargo, ninguna norma concreta impone al juez la necesidad de evaluar la citación personal, antes que la parte remita el aviso si es lo que considera pertinente. Por tanto, no puede imputarse una conducta procesal inadecuada del juez sobre este punto, si no hay una norma concreta que lo obligue a actuar de ese modo.

Aun al margen de todo lo anterior hay un hecho que resulta incontestable: la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2018. Cumpliendo razonablemente con sus cargas, el juzgado la admitió y notificó la providencia al demandante el 29 de enero de 2019. ¿Por qué se tardó más de siete meses para intentar la notificación personal y más de un año para el aviso? Esta pregunta no tiene justificación.

05266 31 03 002 2018 00334 01
MP. Martín Agudelo Ramírez

En este orden de ideas, en este caso puede concluirse que si la notificación a la parte demandada no se produjo dentro del año siguiente a la admisión de la demanda fue por dos razones fundamentales: 1. La tardanza injustificada del demandante de más de siete meses para intentar la notificación; 2. Y el hecho de que ese intento se hiciera desconociendo las reglas sobre el procedimiento respectivo, como se concluyó en el auto del 23 de julio de 2020 –después de transcurrido el año. Las tardanzas imputables al juzgado para avalar los intentos de notificación, aunque existieron, no fueron determinantes, en parte porque se produjeron con posterioridad a la configuración del término del artículo 94 del CGP, por lo menos en lo que respecta al aviso.

En este orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia.

COSTAS

Con base en lo dispuesto en el artículo 365, no se condenará en costas a la parte apelante por ser beneficiario de amparo de pobreza.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de fecha 10 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en el asunto de la referencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Notifíquese y cúmplase;



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
Magistrado



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado